

Señor
JUEZ LABORAL DEL CIRCUITO MEDELLÍN (REPARTO).
E.S.D.

REFERENCIA. PROCESO ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA.
DEMANDANTE. VALENTINA ANTONIA PALMA ARIZA
DEMANDADOS. PROTECCION S.A.
COLPENSIONES.

FELIPE ROJAS PINEDA, mayor de edad y domiciliado en el municipio de Medellín, abogado titulado y en ejercicio, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de apoderado de la señora **VALENTINA ANTONIA PALMA ARIZA de ciudadanía N° 32.679.731** mayor de edad, según poder otorgado que anexo, presento demanda ordinaria laboral para que se tramite un proceso ordinario laboral de primera instancia, en contra de **SOCIEDAD DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A.**, de ahora en adelante denominada **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A.**, con domicilio en Bogotá D.C., y representada legalmente por el **señor JUAN DAVID CORREA SOLORZANO** o por quien haga sus veces a la presentación de la demanda, y de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES "COLPENSIONES"**, con domicilio en Bogotá D.C., y representada legalmente por el **Señor Mauricio Olivera González**, o quien haga sus veces, cuando se presente la demanda a fin de que se hagan en su contra las siguientes declaraciones y condenas:

HECHOS.

PRIMERO: La señora **VALENTINA ANTONIA PALMA ARIZA**, estuvo afiliada al **INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, ISS**, hoy **COLPENSIONES**, desde **enero de 1988 hasta junio de 1998**, de forma discontinua, cotizando a pensiones.

SEGUNDO: Posteriormente, fue visitada por un asesor del fondo de pensiones **PROTECCION S.A.**, quien la convenció que su mejor opción pensional era trasladarse para el nuevo régimen pensional de Ahorro Individual (RAIS) y en efecto suscribió la afiliación, la cual se hizo efectiva a partir del 1 de abril de 1994, entidad financiera a la cual continúa afiliada.

TERCERO: La información que recibió La señora **VALENTINA ANTONIA PALMA ARIZA** del asesor del fondo privado de pensiones **PROTECCION S.A.** Consistió en que, **a) Que se pensionaría a la edad que él quisiera, lo cual podría ser antes de los 40 años y con un mayor valor ECONOMICO, que sería superior o igual al 80 % del salario que ganaba al momento de pensionarse, lo que NO lograría si hubiera continuado en el ISS. b) Pero, además era obligación trasladarse porque el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, ISS, iba a desaparecer y corría el riesgo de perder los aportes, que hasta el momento había realizado. c) Que podría perder el bono pensional. d) que podría recibir préstamos de esa entidad. e) Que esta era su única y mejor opción. En consecuencia, a la información recibida que no fue completa y por no conocer otra opción, se traslada del Régimen pensional de Prima Media con Prestación Definida, RPM, al de Ahorro Individual con Solidaridad, RAIS.**

Parcialmente lo enunciado por el asesor es posible, **de acuerdo a lo establecido en la ley referente a esta materia**, sin embargo, **LA ADMINISTRADORA PROTECCION S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, NUNCA CUMPLIO CON SU DEBER LEGAL EN CUANTO A PROVEER LA INFORMACIÓN, NECESARIA, CLARA, PRECISA, OPORTUNA, REAL, SERIA, HONESTA, RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS O QUE DEBÍA REALIZAR** La señora **VALENTINA ANTONIA PALMA ARIZA A FIN DE LOGRAR AQUELLOS SUPUESTOS PROMETIDOS**, donde queda demostrado que el único fin del asesor era el de inducir al cliente a que realizara el traslado **del régimen pensional de Prima Media con Prestación Definida, RPM. Al de Ahorro Individual con Solidaridad, RAIS.**

CUARTO: Posteriormente pudo comprobar que la información recibida por la **AFP PROTECCION S.A. NO ERA VERDAD**, que había recibido una información a medias o información incompleta, información que no era clara, precisa, correcta, concreta, concisa, real, seria, honesta y lo corroboro, porque **NUNCA** le informaron que para pensionarse antes de o a las 40 años, tenía que realizar unos aportes extraordinarios muy altos casi cinco veces de que aportaba, tendría que tener una capital cuatro veces mayor a lo que acumularía con los aportes normales o los venía realizando, también, adicionalmente debería hacer aportes voluntarios a los que por ley eran obligatorios, nunca le informaron que su bono pensional para poder pensionarse antes o a los 40 años, tendría que ir a la bolsa de valores o al mercado financiero, teniéndose que feriar, para volverlo efectivo, es decir, someterse a las reglas de mercado, donde muy seguramente entraría a una negociación con la cual sería golpeado económicamente perdiendo hasta el 50 % o más del valor real del bono, no era cierto que le prestarían dinero por parte de **PROTECCION S.A.**, nunca le informaron que debía reportar o inscribir los posibles beneficiarios, en caso de faltar es decir, de fallecer. Los compañeros de trabajo que se quedaron en el régimen privado AFP, RAIS y que tienen salarios iguales o similares a mi poderdante, salieron pensionados con un monto inferior, es decir con un 70 % menos de su salario, caso contrario los que regresaron a fondo público RPM, de manera voluntaria o los que demandaron solicitando el derecho de poder regresar y el juez les concedió en derecho, salieron pensionados con un monto en promedio de un 66 % de su salario.

Como inicialmente **NO LE BRINDARON UNA INFORMACION, que hoy considera mi poderdante que no fue, CLARA, CONCRETA, PRECISA, SERIA, HONESTA, REAL**, ni tampoco le prestaron una asesoría personal en los años posteriores a la afiliación, nunca fue visitado en el tiempo de afiliado y adicionalmente nunca fue informado de **LOS PRO Y CONTRAS**, de continuar o no en el fondo privado RAIS o de regresar a régimen de prima media que administra hoy **COLPENSIONES**, considera que a partir de esta falta u omisión de información le indujeron a tomar una decisión **ERRADA**, sin su real consentimiento, sin mostrarle o conocer otras opciones, sin asesoría, lo que se podría interpretarse desde el campo legal, **como la inducción a un error lo que vicia el consentimiento**, la cual se configuro al momento de haber tomado esa decisión de trasladarse de fondo público RPM al fondo privado RAIS.

Por esa razón la señora **VALENTINA ANTONIA PALMA ARIZA**, radicó un derecho de petición por medio del cual se solicitó el traslado de fondo de pensión, de **PROTECCION S.A.** a **COLPENSIONES**, en el cual tuvo una respuesta negativa de la siguiente manera,

“...Finalmente, hacemos algunas precisiones acerca de la reglamentación vigente en materia de traslados y le informamos que todo afiliado conserva el derecho de trasladarse de régimen, siempre y cuando:

Hayan permanecido en el último régimen por lo menos cinco años contados a partir de la selección inicial o el último traslado válido

No les faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez...”

Información que para poder ser conocida por mi poderdante tuvo que ser solicitada, a raíz de que nunca obtuvo comunicación o una atención voluntaria a fin de informas pros y contras de ambos regímenes, RPM y RAIS. **¿Por qué esta información tuvo que ser solicitada para poder ser conocida por mi poderdante? ¿Dónde está la verdadera atención al usuario en el tiempo oportuno acerca de su futuro?**

QUINTO. Que mi poderdante, no fue advertida en su oportunidad por el fondo privado **PROTECCION S.A.**, de la fecha de poder trasladarse de Fondo de pensiones el cual tenía un límite el cual sería antes de los últimos diez (10) años de pensionarse, información o requisito que nunca fue comunicado, es decir no se cumplió con la exigencia establecida por la **Superintendencia Bancaria de Colombia en la circular externa número 001 de enero 8 de 2004, normativa expedida a la semana siguiente de haber entrado en vigencia la Ley 797 de 2003 y el Decreto 3800 del 2003, en el sentido de que era obligación del fondo haberle informado a todos sus afiliados cobijados por la restricción de la edad de esta situación para que escogieran el régimen pensional que más les convenía; o sea, haberle informado al demandante en este caso, que se podía pasar de régimen antes de que estuviera a diez (10) años o menos de cumplir requisitos de pensión**, lo que indica que mi clienta no tuvo la oportunidad de tomar una decisión libre, espontanea, voluntaria y tranquila.

SEXTO. Que de acuerdo a lo expuesto los puntos anteriores, es claro entonces, que el cambio de régimen pensional del **INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL, ISS al ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A.**, le trajo **grandes desventajas** a la señora **VALENTINA ANTONIA PALMA ARIZA**, y siendo así, debe deducirse como lógica consecuencia, que no fue debidamente informado del tema del traslado por el asesor del fondo privado, por lo tanto ella afirma que la indujeron, por brindarle información errada, no clara, no precisa, no real, no sincera, no objetiva, al prometerle una suma superior de la mesada de pensión, lo cual como ya se explicó, no es cierto pues la **HICIERON CAER EN UN ERROR el cual que VICIO SU CONSENTIMIENTO**, pues este traslado no fue libre, espontaneo, natural y menos tranquilo.

SEPTIMO. Que en igual sentido la señora **ANA MARIA LOPEZ PALACIO** al momento de su traslado de régimen, nunca recibió de **PROTECCION S.A.** a través de sus asesores comerciales, algún estudio técnico financiero previo, análisis económico, proyección cálculo actuarial individual de su pensión, mediante el cual se le explicara, aclarara y demostrara objetivamente al demandante, sin lugar a equívocos, que la opción de cambiarse de régimen era la alternativa indicada, para que en un futuro pudiera obtener y disfrutar de una pensión de vejez con un valor importante. Tampoco le fueron presentadas las ventajas y desventajas económicas de cada régimen pensional en cuanto al valor de mesada que recibiría en uno u otro fondo, fundamentos que de haberlos conocido le hubieran permitido analizar la importancia de la decisión de trasladarse del **RPM al RAIS o viceversa.**

OCTAVO.

NOVENO. Que **AFP PROTECCION S.A.** Falto por acción u omisión, al deber de **información y de asesoría a la demandante**, señora **VALENTINA ANTONIA PALMA ARIZA**, ya que no se le ofreció el traslado de régimen a la demandante, verificando si esta era beneficiaria del régimen de transición **consagrado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993**, ni mucho menos expuso la imposibilidad de recuperarlo en el evento de

materializarse el cambio de régimen. Aunado a lo anterior, **PROTECCION S.A.**, incumplió su obligación de informar de la posibilidad de hacer uso del plazo de traslado de régimen previsto en el literal e) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2 de la ley 797 de 2003, reglamentado por el artículo 1 del Decreto 3800 de 2003, en la forma que lo dispuso la circular externa 001 de 2004 expedida por la Superintendencia Bancaria, esto es, enviando una comunicación en dicho sentido al último domicilio que tenía registrado la hoy demandante o visitándola en su lugar de trabajo, de igual forma como cuando la afiliaron.

DECIMO. Que la Carga de prueba en este caso, le corresponde a **AFP PROTECCION S.A.** Por ser la parte dominante, la del musculo financiero, la que tiene el mayor conocimiento de los negocios de las pensiones, la de experiencia financiera, es quien deberá aportar las pruebas correspondientes. Sin embargo, como nunca fue asesorado e informado en debida forma, la señora **VALENTINA ANTONIA PALMA ARIZA**, aportara como pruebas las respuestas emitidas por **PROTECCION S.A.** y **COLPENSIONES**, que, **DE NO SOLICITARLAS, NUNCA HUBIERA CONOCIDO LA VERDAD.** En esos documentos queda claro que la falta de información, la información indebida o no suministrada indujeron mi poderdante a un error, y en consecuencia a la toma indebida de decisiones que viciaron su libre consentimiento.

Confirmamos que la carga de la prueba la tiene la **AFP PROTECCION S.A.**, así: **Que de acuerdo con la Ley 1328 de 2009, ARTÍCULO 11. PROHIBICIÓN DE UTILIZACIÓN DE CLÁUSULAS ABUSIVAS EN CONTRATOS.** Se prohíbe las cláusulas o estipulaciones contractuales que se incorporen en los contratos de adhesión que: **a)** Prevean o impliquen limitación o renuncia al ejercicio de los derechos de los consumidores financieros. **b)** Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor financiero. **c)** Incluyan espacios en blanco, siempre que su diligenciamiento no esté autorizado detalladamente en una carta de instrucciones. **d)** Cualquiera otra que limite los derechos de los consumidores financieros y deberes de las entidades vigiladas derivados del contrato, o exonere, atenúe o limite la responsabilidad de dichas entidades, y que puedan ocasionar perjuicios al consumidor financiero. **e)** Las demás que establezca de manera previa y general la Superintendencia Financiera de Colombia.

PRETENSIONES.

PRIMERO. Que se declare la ineficacia de la afiliación al fondo privado de pensiones **PROTECCION S.A.** de la señora **VALENTINA ANTONIA PALMA ARIZA**, por obedecer a un vicio del consentimiento por inducción al error en consideración a una falta de información, información que nunca fue clara, concreta, concisa, veraz, seria, objetiva, que, por medio de sentencia emitida por el juez, se ordene que dicha situación vuelva a su estado inicial, es decir, que sea nuevamente recibida en el Régimen de **Prima Media con Prestación, Definida**, al que estaba afiliado la actora y que hoy administra **COLPENSIONES**, que se declare no continuar en el actualmente **Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS)**, que administra el Fondo de Pensiones y Cesantías **PROTECCION S.A.**, es decir, disponer el regreso automático a **COLPENSIONES**.

SEGUNDO. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y ordenes, solicito que se ordene a la **ADMINISTRADORA DE FODNO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCION S.A.** Trasladar el saldo de la cuenta de ahorro individual con solidaridad de la señora **VALENTINA ANTONIA PALMA ARIZA** a **COLPENSIONES**, es decir todos los valores que se encuentren en la cuenta de ahorro individual de la demandante, como cotizaciones, bonos pensionales o sumas adicionales de la aseguradora, con los rendimientos que se hubieren causado, comisiones y demás

dineros que haya reunido la actora durante el tiempo en que estuvo afiliada al RAIS.

TERCERO: Que se ordene a COLPENSIONES reciba dichos aportes y autorice el regreso de la señora VALENTINA ANTONIA PALMA ARIZA al Régimen Pensional de Prima Media con Prestación Definida que ésta administra, sin dejar la de continuidad en dicha afiliación.

CUARTO: Que se condene en costas a PROTECCION S.A.

FUNDAMENTOS Y RAZONES EN DERECHO.

Debido a que en la presente demanda se solicita la ineficacia de la afiliación al **Régimen de ahorro individual con solidaridad, RAIS** toda vez que se vicia el consentimiento a pesar de ser un contrato especial, ya que, este se encuentra en la esencia de todo acto jurídico o contrato y que en el presente contrato previsional, establecido en el estatuto del trabajo y de la seguridad social, se encuentra viciado el consentimiento por error sobre la calidad del objeto, establecido en el artículo 1511 del código civil, por lo cual se pretende que se le permita regresar al Régimen de **Prima Media con prestación definida, RPMD**. Pretensión en derecho, que ha sido concedido por **Juzgados Laborales de la ciudad de Medellín en primera instancia , como también aprobada y concedida por los Tribunales Superiores de Medellín, en segunda instancia y se ha convertido en una línea jurisprudencial de la CORTE DE CONSTITUCIONAL y de LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACION LABORAL**, el conceder el derecho solicitado, por las razones expuestas y enunciadas en este escrito, porque es de conocimiento público que en materia pensional resulta más beneficioso el **Régimen de Prima Media con Prestación Definida que actualmente es administrada por COLPENSIONES, sobre o comparado con el RAIS.**

En COLPENSIONES, solo basta completar la densidad de semanas y la edad exigidas para adquirir dicha prestación económica. En cambio, En el Régimen de Ahorro Individual RAIS, **la pensión es el resultado del ahorro acumulado durante la etapa productiva del afiliado, más aportes adicionales, más rendimientos generados, que se deposita en una cuenta individual, a nombre de su titular y se deben cumplir varias condiciones.**

En el caso que nos ocupa, en la presente demanda por una mala asesoría **ES DECIR UNA MALA INFORMACION, QUE NO FUE CLARA, CONCRETA, CONCISA, SERIA, HONESTA, DONDE NO LE INDICARON LOS PRO Y CONTRA DE LOS DOS REGIMENES, PARA QUE ASI PUDIERA TOMAR DE MANERA LIBRE, VOLUNTARIA, LA MEJOR DECISION DE PERMANECER O RETIRARSE DEL REGIMEN AL CUAL HOY SE ENCUENTRA AFILIADO (ISS). LA INDUJERON a un error de afiliarse al fondo privado de Pensiones PROTECCION**, donde el asesor **NUNCA le explico de los montos que debía tener, los aportes que debía realizar y menos las ventajas y desventajas que hay entre EL RAI y EL RAIS. QUE, DE SABER LA VERDAD DE LAS CONSECUENCIAS DEL TRASLADO AL RAIS, NUNCA SE HUBIERA TRASLADADO.** Sólo le indicaron que el traslado del RAI al RAIS le era más beneficioso económicamente, pero además de forma temeraria le indican que de NO trasladarse a la **AFP PROTECCION S.A. Perdería todo lo acumulado, ahorrado, aportado al ISS, porque esta institución desaparecería.**

Posteriormente quiso regresar a **COLPENSIONES**, la cual no fue aceptada por **PROTECCION S.A.** aduciendo la entidad que se encuentra dentro del limitante, truncándose la posibilidad de regresar al **Régimen de Prima Media, del cual se retiró**

por error, por la falta de una información clara, concreta, donde esta información indebida se convierte en un vicio del consentimiento, como lo indica EL CODIGO CIVIL:

“El Código Civil ARTICULO 1508. <VICIOS DEL CONSENTIMIENTO>. Los vicios de que puede adolecer el consentimiento son error, fuerza y dolo.

ARTICULO 1510. <ERROR DE HECHO SOBRE LA ESPECIE DEL ACTO O EL OBJETO>. El error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación; o sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada, y el comprador entendiese comprar otro.”

No tuvo en cuenta el fondo privado demandado la orden dada por la **Superintendencia Bancaria** en su Circular Externa 001 de enero 8 de 2004, por la cual ordenaba la información a los afiliados al sistema pensional de la entrada en vigencia de la **Ley 797 de 2003** que regulaba el tema de la escogencia de régimen y que no podía trasladarse si le faltaban diez o menos años de edad, a fin de que libremente el usuario definiera su situación, omisión que debe tener consecuencias jurídicas, como el de la ineficacia del acto de afiliación del demandante que se invoca en esta demanda, como tampoco respecto a lo descrito o el mandato de

“LA LEY 1328 DE 2009.

ARTÍCULO 5o. DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES FINANCIEROS. Sin perjuicio de los derechos consagrados en otras disposiciones legales vigentes, los consumidores financieros tendrán, durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, los siguientes derechos:

a) En desarrollo del principio de debida diligencia, los consumidores financieros tienen el derecho de recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas.

b) Tener a su disposición, en los términos establecidos en la presente ley y en las demás disposiciones de carácter especial, publicidad e información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable, sobre las características propias de los productos o servicios ofrecidos y/o suministrados. En particular, la información suministrada por la respectiva entidad deberá ser de tal que permita y facilite su comparación y comprensión frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado.

c) Exigir la debida diligencia en la prestación del servicio por parte de las entidades vigiladas.

d) Recibir una adecuada educación respecto de las diferentes formas de instrumentar los productos y servicios ofrecidos, sus derechos y obligaciones, así como los costos que se generan sobre los mismos, los mercados y tipo de actividad que desarrollan las entidades vigiladas, así como sobre los diversos mecanismos de protección establecidos para la defensa de sus derechos.

e) Presentar de manera respetuosa consultas, peticiones, solicitudes, quejas o reclamos ante la entidad vigilada, el defensor del Consumidor Financiero, la Superintendencia Financiera de Colombia y los organismos de autorregulación.

f) Los demás derechos que se establezcan en esta ley o en otras disposiciones, y los contemplados en las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia.

Señor juez, aparte de la deficiencia en la información suministrada y la no informada, quiero de manera respetuosa llamar su atención con respecto a que, es ostensible el perjuicio causado con el cambio de régimen pensional, dado que de acuerdo a la proyección pensional que entregó **AFP PROTECCION S.A. PENSIONES Y CESANTIAS**, la accionante irremediabilmente recibiría de mesada de pensión, de solamente **UN (1) salario mínimo legal Vigentes, SMMLV**, cuando como se constatará en el proceso, siempre ha cotizado al sistema sobre una base salarial muy superior, y por ende obtendría un mayor valor de la pensión en el **Régimen de Prima Media que administra Colpensiones**, **LA MALA INFORMACION O LA INFORMACION NO SUMINISTRADA ES DECIR EL CALLAR SE REPLICA EN ENGAÑO** del que fue objeto el poderdante.

De otro lado, señor juez, **PROTECCION S.A. PENSIONES Y CESANTIAS**, no le proporcionó a la actora una suficiente, completa y clara información sobre las reales implicaciones que le conllevaría dejar el **Régimen de Prima Media** y sus eventuales consecuencias futuras, pues de haberlo hecho, la señora **VALENTINA ANTONIA PALMA ARIZA**, **nunca se hubiera trasladado** al RAIS.

Sobre el particular las pretensiones, existe una línea jurisprudencial de la **Sala de Casación Laboral** sobre la obligación que tienen los fondos privados de pensiones de proporcionar una información clara completa y precisa sobre los **PRO y LOS CONTRA** del traslado entre regímenes, **lo sustentare en las siguientes sentencias**:

En sentencia del 22 de noviembre de 2011, Radicación 33.083, donde la alta Corporación rememora sentencias de ella misma proferidas en septiembre de 2008, ratificada en sentencia del 3 de septiembre de 2014, radicación 46.292, M.P. Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón, donde la alta Corporación insiste en la obligación que tienen los fondos privados de pensiones privados de proporcionar a los afiliados una información completa.

En alguno de los apartes de la sentencia de 2011, se señaló:

"Además, debe la Corte destacar que no fue objeto de controversia que el actor estuvo afiliado al régimen pensional que administra el Instituto de Seguros Sociales desde el 12 de marzo de 1969 hasta el 12 de agosto de 2002, fecha ésta en la que se trasladó a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.,A.; que nació el 13 de octubre de 1944, por lo que estaba amparado por el régimen de transición que establece el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que cumplía con los requisitos a que alude la citada normativa".

"En ese sentido, resultaba necesario y obligado que el Fondo de Pensiones demandado proporcionara al actor una suficiente, completa y clara información sobre las reales implicaciones que le conllevaría dejar el anterior régimen y sus posibles consecuencias futuras...".

En las sentencias de septiembre de 2008, radicados 31.989 y 31.314, se había dicho:
"La doctrina ha bien elaborado un conjunto de obligaciones especiales, con específica vigencia para todas aquellas entidades cuya esencia es la gestión fiduciaria, como la de

las administradoras de pensiones, que emanan de la buena fe, como el de transparencia, vigilancia, y el deber de información.

"La información debe comprender todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional."

"Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad."

"Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una acción de claramente le perjudica..."

La anterior línea jurisprudencial viene siendo acogida por la **Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín**, quien en reiteradas decisiones declara la nulidad de la afiliación al **RAIS**, acogiendo las pretensiones de la demanda.

En trascendental decisión, la **Sala Sexta de Decisión laboral**, el día 31 de julio de 2014, en el proceso ordinario laboral que promoviera la señora Lina María Restrepo de Saldarriaga en contra de **Colpensiones** y Protección S.A., ante el Juzgado 3 Laboral del Circuito de esta ciudad, Radicado 2013-081, M.P. Dra. Ana María Zapata, revocó la decisión de primera instancia y accedió a las pretensiones de la demanda, donde la Sala señala que existió vicio en el consentimiento de la actora por error inducido en el traslado que hizo del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al de Ahorro Individual con Solidaridad, y básicamente por no haber cumplido el fondo privado con sus deberes que le impone la ley al administrar un servicio público como lo es la Seguridad Social, en los términos del artículo 48 de la C.P. Concretamente en que la asesoría a la afiliación al fondo privado haya sido previa, concreta y clara, informándole al usuario si el traslado le podría generar una desventaja; siendo la responsabilidad del fondo de carácter profesional, pues son ellos los expertos en el tema financiero y no el usuario que es lego en esa materia y llegar hasta el buen consejo, que implica disuadir incluso al usuario de no trasladarse por las desventajas que le puedan traer.

Se refiere el Tribunal de la ética profesional y social que debe observar el fondo privado de pensiones, pues la misión del legislador colombiano es procurar que todos sus habitantes se pensionen con mesadas dignas.

En esta importante decisión, agrega el Tribunal, que los fondos privados incurren en información incompleta, sesgada, no hay objetividad, no ilustran al usuario de las **ventajas y desventajas** que el cambio de régimen pensional les puede traer, todo lo cual hace que se vicie el consentimiento por error o engaño que es lo sucedido con la actora, en el caso que nos ocupa; que el usuario actúa bajo los principios de buena fe y confianza legítima, dado que el fondo privado presta un servicio público, lo que hace que crea todo lo que le dijeron, siendo esa la mejor opción pensional que tenía y dado que con la nulidad pretendida está involucrado es el derecho pensional en sí mismo, que tiene una relación directa con él, no se presenta la prescripción de que trata el **art. 151 del CPTSS, al ser el derecho pensional imprescriptible.**

Finalmente, pone de presente el Tribunal, que esa asesoría profesional que le incumbe al fondo privado debe ser por todo el tiempo de la afiliación y si bien la **Ley 797 de 2003 dio un año de gracia para que el usuario se pudiera devolver al ISS**, ha debido el mismo fondo el que informara de ello al afiliado y le recomendara su regreso al Régimen de Prima Media, sin que pueda imputársele omisión alguna en tal sentido al usuario y **Que de acuerdo a la Ley 1328 de 2009, ARTÍCULO 11.**

“PROHIBICIÓN DE UTILIZACIÓN DE CLÁUSULAS ABUSIVAS EN CONTRATOS. Se prohíbe las cláusulas o estipulaciones contractuales que se incorporen en los contratos de adhesión que: a) Prevean o impliquen limitación o renuncia al ejercicio de los derechos de los consumidores financieros. b) Inviertan la carga de la prueba en Perjuicio del consumidor financiero. c) Incluyan espacios en blanco, siempre que su diligenciamiento no esté autorizado detalladamente en una carta de instrucciones. d) Cualquiera otra que limite los derechos de los consumidores financieros y deberes de las entidades vigiladas derivados del contrato, o exonere, atenúe o limite la responsabilidad de dichas entidades, y que puedan ocasionar perjuicios al consumidor financiero. e) Las demás que establezca de manera previa y general la Superintendencia Financiera de Colombia”

Que en de acuerdo con la Ley 1328 de 2009, ARTÍCULO 11. PROHIBICIÓN DE UTILIZACIÓN DE CLÁUSULAS ABUSIVAS EN CONTRATOS. Se prohíbe las cláusulas o estipulaciones contractuales que se incorporen en los contratos de adhesión que: a) Prevean o impliquen limitación o renuncia al ejercicio de los derechos de los consumidores financieros. b) **Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor financiero.** c) Incluyan espacios en blanco, siempre que su diligenciamiento no esté autorizado detalladamente en una carta de instrucciones. d) Cualquiera otra que limite los derechos de los consumidores financieros y deberes de las entidades vigiladas derivados del contrato, o exonere, atenúe o limite la responsabilidad de dichas entidades, y que puedan ocasionar perjuicios al consumidor financiero. e) Las demás que establezca de manera previa y general la Superintendencia Financiera de Colombia.

En la inversión de la carga de la prueba, que le corresponde en este acaso a la AFP **PROTECCION S.A.**, la cual nos anticipamos, aportando la documentación enviada por el fondo donde responden lo solicitado por la señora **VALENTINA ANTONIA PALMA ARIZA**, se convertirá en prueba y confesión de que nunca le asesoraron y menos le dijeron el límite de edad o de poder o no trasladarse de régimen pensional.

Pruebas confesionales:

- Copia Respuesta de **PROTECCION S.A.**, radicado N° CAS-5482227-X6C5D8. De fecha 10 marzo de 2020.
- Copia Respuesta de **COLPENSIONES S.A.**, radicado N° BZ2020_3375068-0684965 De 09 de marzo de 2020.

Con estos documentos aportados, Queda demostrado lo siguiente:

- 1. La falta de atención al cliente.**
- 2. La falta de información o una debida información al cliente.**
- 3. La información entregada no es voluntaria, sino obligatoria y no porque lo Exige la ley, sino porque era solicitada por el cliente, con respuestas a medias, es decir, las respuestas nunca fueron claras, concretas, precisas, honestas, amplias, didácticas y mucho menos eficaces, ni eficientes.**
- 4. Se demuestra el poder dominante de la financiera AFP PROTECCION S.A. Que es experta en el sector de pensiones y cesantías, que tiene un musculo Financiero, Frente al cliente, en este caso la señora VALENTINA ANTONIA PALMA ARIZA, quien es una persona lega en el tema, no fue informada de manera adecuada.**
- 5. Que el cliente para ellos no es importante, que debió conseguir la información por su cuenta y asumir las Consecuencias de lo que ellos no fueron capaces de hacer, es decir presentarle una debida información por parte de AFP PROTECCION S.A.**
- 6. Que con esto se demuestran que la AFP PROTECCION S.A. al no presentar una información clara, concreta, completa, indujo en un error al cliente esto es un mal trato y poco interés por el futuro de su afiliado.**
- 7. Que para, AFP PROTECCION S.A El cliente es solo mercancía que les debe producir ganancias y utilidades.**
- 8. Que la AFP PROTECCION S.A. demuestra la poca o falta de solidaridad con el cliente y su bienestar.**
- 9. Queda demostrado con lo enunciado en este documento, la Clara violación al estado social de Derecho, por parte de la entidad financiera AFP PROTECCION S.A. esta primero la institución que las personas.**

La SALA DE CASACIÓN LABORAL, con la **MAGISTRADA PONENTE ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN** en **sentencia SL12136-2014**, con **RADICACIÓN N°46292**, del 3 de septiembre de 2014, determino;

“No podría argüirse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica; de allí que desde el inicio haya correspondido a las Administradoras de Fondos de Pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito.

Una inoportuna o insuficiente asesoría sobre los puntos del tránsito de régimen son indicativos de que la decisión no estuvo precedida de la comprensión suficiente, y menos del real consentimiento para adoptarla.”

De la misma forma, la SALA DE CASACIÓN LABORAL, con la **MAGISTRADA PONENTE ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN** en **sentencia SL17595-2017**, con **RADICACIÓN N° 46292**, del 18 de octubre de 2017, estableció que;

“De suerte que COLFONDOS S.A no acreditó que le suministró al promotor del proceso los suficientes datos y explicaciones del traslado respectivo tal y como se expuso en la esfera casacional, máxime que, en este asunto, se reitera, están en juego aspectos tan trascendentes como la pérdida de la transición, y de contera la imposibilidad de acceder a la pensión de vejez, se requiere acudir a una hermenéutica que se avenga a los principios que inspiran al sistema y a los regímenes pensionales, en los que se prevé el traslado libre y voluntario, e incluso a las disposiciones que en la ley así lo imponen.

Aquí y ahora, se recuerda que no es dable argüir que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica; de allí que desde el inicio haya correspondido a las Administradoras de Fondos de Pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito.”

Seguidamente, la SALA DE CASACIÓN LABORAL, teniendo en esta ocasión la **MAGISTRADA PONENTE CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO**, en la **sentencia SL413-2018** con **RADICACIÓN N° 52704** del 21 de febrero de 2018, determinó;

“Desde luego que, para la tesis que ahora sostiene la Sala, la presencia o no de cotizaciones consistente con el formato de vinculación no es la única expresión de esa voluntad, pueden existir otras, tales como las solicitudes de información de saldos, actualización de datos, asignación y cambio de claves, por mencionar algunos actos de relacionamiento con la entidad que pueden denotar el compromiso serio de pertenecer a ella. Lo importante es que exista correspondencia entre voluntad y acción, es decir, que la realidad sea un reflejo de lo que aparece firmado, de modo tal que no quede duda del deseo del trabajador de pertenecer a un régimen pensional determinado. -”

Concepto que en el caso que nos trae a dicha actuación **no se logra determinar, afectando profundamente el consentimiento** pleno de la parte actora en el traslado realizado y mencionado en el acápite de los hechos. Consentimiento que ha de ser necesario de forma plena, de acuerdo con lo establecido las sentencias previamente citadas e incluso reiteradas en la **sentencia SL19447-2017**, con **RADICADO N° 47125**, el cual tiene como **MAGISTRADO PONENTE a GERARDO BOTERO ZULUAGA** EN FECHA 27 de septiembre de 2017, donde se refiere al consentimiento de la siguiente forma;

“Una inoportuna o insuficiente asesoría sobre los puntos del tránsito de régimen son indicativos de que la decisión no estuvo precedida de la comprensión suficiente, y menos del real consentimiento para adoptarla.

Es evidente que cualquier determinación personal de la índole que aquí se discute, es eficaz, cuando existe un consentimiento informado; en materia de seguridad social, el juez no puede ignorar que, por la trascendencia de los derechos pensionales, la información, en este caso, del traslado de régimen, debe ser de transparencia máxima.

Para este tipo de asuntos, se repite, tales asertos no comprenden solo los beneficios que dispense el régimen al que pretende trasladarse, que puede ser cualquiera de los dos (prima media con prestación definida o ahorro individual con solidaridad), sino además el monto de la pensión que en cada uno de ellos se proyecte, la diferencia en el pago de los aportes que allí se realizarían, las implicaciones y la conveniencia o no de la eventual decisión y obviamente la declaración de aceptación de esa situación. Esas reglas básicas, permiten en caso de controversia estimar si el traslado cumplió los mínimos de transparencia, y de contera, sirven de soporte para considerar si el régimen de transición le continuaba o no siendo aplicable.

El juez no puede pasar inadvertidas falencias informativas, menos considerar que ello no es de su resorte, pues es claro que cuando quien acude a la jurisdicción reclama que se le respete el régimen de transición, indiscutiblemente, como se anotó, surge la perentoriedad de estudiar los elementos estructurales para que el mismo opere, es decir, debe constatar que el traslado se produjo en términos de eficacia, para luego, determinar las consecuencias propias.

En ese orden se clarifica con esta decisión que cuando lo que se discuta sea el traslado de regímenes, que conlleve a la pérdida de la transición, al juzgador no solo le corresponde determinar si aquella se respeta por contar con los 15 años de servicio a la entrada de vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es el 1° de abril de 1994, sino que será menester determinar, previamente, por tratarse de un presupuesto de eficacia, si en todo caso aquel estuvo ajustado a los principios que gobiernan el Estatuto de Seguridad Social, y a las reglas de libertad de escogencia del sistema, la cual estará sujeta a la comprobación de que existió una decisión documentada, precedida de las explicaciones sobre los efectos del traslado, en todas sus dimensiones legales.

De manera que, conforme lo discurrido queda claro que existirá ineficacia de la afiliación cuando quiera que i) la insuficiencia de la información genere lesiones injustificadas en el derecho pensional del afiliado, impidiéndole su acceso al derecho; ii) no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; iii) en los términos del artículo 1604 del Código Civil corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados, los cuales, de no ser ciertos, tendrán además las sanciones pecuniarias del artículo 271 de Ley 100 de 1993, y en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional."

La sala de casación laboral ha venido reiterando los precedentes, en **sentencia SL4964**, con el **RADICADO N°54814**, Magistrado ponente, Gerardo Botero Zuluaga, se manifestó:

“...es la propia ley la que sanciona, con severidad, el incumplimiento íntegro de los deberes de información que les atañe e incluso, para la controversia aquí suscitada ello era determinante, de un lado porque la simple manifestación genérica de aceptar las condiciones, no era suficiente, y de otro, correspondía dar cuenta de que se actuó diligentemente, no solo por la propia imposición que trae consigo la referida norma, sino porque en los términos del artículo 1604 del Código Civil, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo, y en este específico caso ellas no se agotan solo con traer a colación los documentos suscritos, sino la evidencia de que la asesoría brindada era suficiente para la persona, y esto no se satisfacía únicamente con llenar los espacios vacíos de un documento, sino con la evidencia real sobre que la información plasmada correspondiera a la realidad y atendiera las pautas para que se adoptara una decisión completamente libre, en las voces del referido artículo 13 de la Ley 100 de 1993...”

Donde si de la **carga de la prueba** queda alguna duda, en la presente sentencia nos aseguran que es la AFP quien la tiene, a partir de lo que aquí se determina:

“...para esta Sala de la Corte es claro, que es la AFP a quien incumbe acreditar que cumplió con el deber de asesoría e información a quienes tienen la intención de ser sus nuevos afiliados, la que debe comprender todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional, tal y como se sostuvo por esta Corporación en la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989 «Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad».

De igual forma, ha puntualizado la Sala, que la información que se ha de proporcionar al afiliado, debe efectuarse bajo la óptica de que quien la brinda sabe de su importancia y valor, a fin de orientar a este, en aquellos aspectos que pueden acarrear consecuencias mayúsculas como es el caso del cambio de régimen, evento en el que la administradora tiene el deber del buen consejo, de ilustración suficiente dándole a conocer las diferentes alternativas, lo que en todo caso va más allá de una simple información o diligenciamiento de un formulario de vinculación o traslado.”

Podemos evidenciar el reiterado concepto que nos demuestra que realmente la entidad en el traslado realizado se encontraba viciado por el consentimiento, como se puede demostrar sucesivamente, de forma más exacta en el concepto dado por la corte

suprema en la sentencia SL1421-2019, Magistrado ponente GERARDO BOTERO ZULUAGA manifestando que:

La falta del requisito de una información detallada, amplia y suficiente para que la demandante, una vez conocida la meta final o resultado último de la negociación de su traslado, impidió que pudiera estar consciente del verdadero efecto de ese movimiento para poder optar por el en forma consciente y libre, es decir con “plena advertencia y pleno consentimiento” Haciendo relación del concepto con las sentencias citadas anteriormente.

Encontramos que, la **última sentencia memorada** la cual nos hace una gran recapitulación y reiteración de los precedentes que la Sala de Casación Laboral ha venido desarrollando, es la **Sentencia SL1688 de 2019, con radicado N°68838 y Magistrado Ponente Clara Cecilia Dueñas Quevedo**, en donde la Sala afirma:

“...para la Sala la incursión en el sistema de seguridad social de nuevos actores de carácter privado, encargados de la gestión fiduciaria de los ahorros de los afiliados en el RAISy, por tanto, de la prestación de un servicio público esencial, estuvo, desde un principio, sujeto a las restricciones y deberes que la naturaleza de sus actividades implicaba.

En efecto, la jurisprudencia del trabajo ha entendido que la expresión libre y voluntaria del literal b), artículo 13 de la Ley 100 de 1993, necesariamente presupone conocimiento, lo cual solo es posible alcanzar cuando se saben a plenitud las consecuencias de una decisión de esta índole. De esta forma, la Corte ha dicho que no puede alegarse «que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica; de allí que desde el inicio haya correspondido a las Administradoras de Fondos de Pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito» (CSJ SL12136-2014)...”

A su vez, sobre el **deber de asesoría y buen consejo** reitero:

“...ya no basta con dar a conocer con claridad las distintas opciones de mercado, con sus características, condiciones, riesgos y consecuencias, sino que, adicionalmente, implica un mandato de dar asesoría y buen consejo. Esto último comporta el estudio de los antecedentes del afiliado (edad, semanas de cotización, IBC, grupo familiar, etc.), sus datos relevantes y expectativas pensionales, de modo que la decisión del afiliado conjugue un conocimiento objetivo de los elementos de los regímenes pensionales y subjetivo de su situación individual, más la opinión que sobre el asunto tenga el representante de la administradora.

De esta forma, el deber de asesoría y buen consejo comporta el análisis previo, calificado y holístico de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor le informe lo pertinente. Esta fase supone el acompañamiento e interacción con personas expertas en la materia que le permitan al trabajador, con respaldo en la opinión, sugerencia o ilustración de su asesor, tomar decisiones responsables en torno a la inversión más apropiada de sus ahorros pensionales.

No podemos dejar de lado lo reiterado en muchas ocasiones por la Sala, en sus precedentes y sin duda determinado en la presente sentencia citada, sobre los formularios:

“...en la medida que la firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos de los fondos de pensiones, tales como «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otro tipo de leyendas de este tipo o aseveraciones, no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acreditan un consentimiento, pero no informado...”

Concluyendo de forma clara a partir de los conceptos jurisprudenciales y lo demostrado a partir de los documentos aportados, se encuentra configurado un vicio del consentimiento, en este caso por el error al que se hizo incurrir a la parte actora, toda vez que la falta de conocimiento e información por parte de la **AFP PROTECCION S.A a VALENTINA ANTONIA PALMA ARIZA**, no le permitió tomar una decisión **libre y voluntaria** que como bien fue citado de forma previa es un requisito a fin de verificar la eficacia del traslado de régimen.

PRUEBAS.

DOCUMENTALES.

- Poder Especial
- Copia de solicitud a Protección S.A. De fecha 06-03-2020
- Copia de solicitud a Colpensiones. De fecha 06-03-2020
- Copia Respuesta de **PROTECCION S.A., radicado N° CAS-5482227-X6C5D8. De fecha 10 marzo de 2020.** (Incluye Historia laboral)
- Copia Respuesta de **COLPENSIONES S.A., radicado N° BZ2020_3375068-0684965 De 09 de marzo de 2020.**
- Certificado de existencia y representación COLPENSIONES Y PORTECCION S.A.

COMPETENCIA Y CUANTIA.

Es usted competente, señor juez, para conocer de la presente demanda, en consideración a la naturaleza del asunto, por el lugar de la reclamación (art. 11 CPTSS) y por ser un asunto sin cuantía (art. 13 CPTSS). Además, porque ya la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del CS de la Judicatura, dirimió un conflicto negativo de jurisdicciones, asignándola a la ordinaria laboral, mediante providencia del 26 de junio de 2015.

ANEXOS.

Original de este documento, más lo anunciado en el acápite de pruebas y Copias de demanda junto con las pruebas, para el traslado a las entidades demandadas y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ministerio Público y para archivo del juzgado, adicionalmente un CD. Que contiene todos los documentos enunciados.

NOTIFICACIONES.

- Demandante.

VALENTINA ANTONIA PALMA ARIZA

Dirección. Carrera 52 N°43-31 oficina 206.
Medellín, Antioquia.

- Apoderado.

FELIPE ROJAS PINEDA.

Carrera 52 N°43-31 oficina 206.
Edificio Antigua Estación del Ferrocarril de Antioquia Medellín.
Teléfono. 3008115092
Correo electrónico. feliperojaspineda@yahoo.es

- Demandadas.

COLPENSIONES.

Cra. 43a # 30-25, Medellín, Antioquia.
Nit: 860.013.816-1. Teléfono: 2836090
Correo electrónico: notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co

PROTECCIÓN S.A.

Cra. 47 # 52 – 86 Centro Comercial Camino Real, Of. 307 - 308
Medellín, Antioquia.

De usted señor, juez.

Atentamente,



FELIPE ROJAS PINEDA.

T.P. N° 175710 Consejo Superior de la Judicatura.
C.C. 6.888.371 de Montería.

Señores

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

Medellín - Antioquia

ASUNTO: PODER ESPECIAL

VALENTINA ANTONIA PALMA ARIZA, mayor de edad, con domicilio en esta ciudad, identificada con la cédula de Ciudadanía número **32.679.731** de Barranquilla-Atlántico, Manifiesto a usted que mediante el presente escrito, confiero poder especial, amplio y suficiente al Doctor **FELIPE ROJAS PINEDA**, portador de la **Tarjeta Profesional Número 175.710** del Consejo Superior de la Judicatura, registrado en el registro nacional de abogados con el correo electrónico feliperojaspineda@yahoo.es quien se identifica con cédula de ciudadanía número **6.888.371**, Abogado Titulado y en ejercicio, para que en mi nombre y representación adelante, todos los trámites correspondientes para solicitar el traslado de la **AFP PROTECCION S.A. A COLPENSIONES**, toda vez que en la **AFP PROTECCION S.A.** nunca se me ha cumplido con lo establecido por el asesor que me vinculo de manera inicial, referente a las asesorías personalizadas, que de buena fe creí y que a lo largo de mi afiliación a esta entidad no me han brindado, manteniéndome en la misma, con una falta de información y constantes promesas que nunca se han cumplido.

Es por esto por lo que mi apoderado queda facultado para radicar peticiones, recibir información, presentar recursos, conciliar, desistir, transigir, sustituir, y demás facultades inherentes que demande la atención del trámite para la adecuada representación de mis intereses.

Sírvase conceder personería jurídica al Doctor **FELIPE ROJAS PINEDA**, para los fines enunciados en el presente mandato.

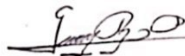
Atentamente,



VALENTINA ANTONIA PALMA ARIZA

Cédula de Ciudadanía número **32.679.731** de Barranquilla-Atlántico.

Acepta;

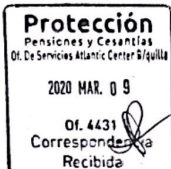


FELIPE ROJAS PINEDA

Tarjeta Profesional N° **175.710** del C. S. de la Judicatura.

C. C. N° **6.888.371** de Montería

Barranquilla, 06 de marzo del 2020.



SEÑORES,

ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CENSANTIAS PROTECCION S.A.

Referencia. Solicitud de traslado de AFP PROTECCION A COLPENSIONES.

Cordial saludo.

Muy respetuosamente, Solicito al representante legal o a su director o quien haga sus veces al momento de recibir este documento, que autoricen mi traslado de la **AFP PROTECCION S.A. A COLPENSIONES**, petición que realizo de manera voluntaria, sin presiones.

Toda vez que a lo largo de los años y el tiempo que he permanecido en esta entidad nunca se me ha cumplido con lo establecido por el asesor que me vinculo de manera inicial, referente a las asesorías personalizadas, que de buena fe creí y que ha lo largo de mi afiliación a esta entidad no me han brindado, manteniéndome en el mismo, con una falta de información y constantes promesas que nunca se han cumplido, por lo cual decido trasladarme de esta entidad a COLPENSIONES.


Esto en cuanto a lo anterior y aunado a que en el tiempo que estado vinculada a esta AFP, nunca tuve una **Asesoría Integral de su aparte, donde se me informara de los Pro y Contra de los RPM o del RAIS, tomo esta determinación.**

NOTIFICACIONES.

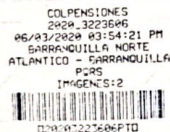
Cra. 52 N° 43-31, Oficina 206. Medellín, Antioquia.
CORREO ELECTRONICO. feliperojaspineda@yahoo.es

De antemano agradezco su pronta y oportuna a respuesta.

Atentamente,


VALENTINA ANTONIA PALMA ARIZA
C.C. N° 32.679.731 de Barranquilla

Barranquilla, 06 de marzo del 2020.



Señores

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES

Referencia. Solicitud de traslado de AFP PROTECCION A COLPENSIONES.

Cordial saludo.

Muy respetuosamente, Solicito al representante legal o a su director o quien haga sus veces al momento de recibir este documento, que autoricen mi traslado de la **AFP PROTECCION S.A. A COLPENSIONES**, petición que realizo de manera voluntaria, sin presiones.

Toda vez que a lo largo de los años y el tiempo que he permanecido en PROTECCION S.A. nunca se me ha cumplido con lo establecido por el asesor que me vinculo de manera inicial, referente a las asesorías personalizadas, que de buena fe creí y que ha lo largo de mi afiliación a esta entidad no me han brindado, manteniéndome en el mismo, con una falta de información y constantes promesas que nunca se han cumplido, por lo cual decido trasladarme de esta entidad a COLPENSIONES.

Esto en cuanto a lo anterior y aunado a que en el tiempo que estado vinculada a esta AFP, nunca tuve una **Asesoría Integral de su aparte, donde se me informara de los Pro y Contra de los RPM o del RAIS, tomo esta determinación.**

NOTIFICACIONES.

Cra. 52 N° 43-31, Oficina 206. Medellín, Antioquia.
CORREO ELECTRONICO. feliperojaspineda@yahoo.es

De antemano agradezco su pronta y oportuna a respuesta.

Atentamente,

VALENTINA ANTONIA PALMA ARIZA
C.C. N° 32.679.731 de Barranquilla-Atlántico

Protección

Medellín, 10 de marzo de 2020

No. de Radicado:
CAS-5482227-X6C5D8

Señor(a):

VALENTINA ANTONIA PALMA ARIZA

CRR 52 N° 43 - 31 Ofc 206

Medellín, Antioquia

Asunto: Respuesta Derecho de petición

Reciba un cordial saludo de Protección S.A.

De manera atenta damos respuesta a su requerimiento radicado en nuestra Administradora por medio de cual nos solicita se efectúe el traslado de salida desde el Fondo de Pensión Obligatoria administrado por Protección S.A hacia la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones.

En concordancia con los principios establecidos en nuestro Sistema de Seguridad Social por la Ley 100 de 1993, todos los afiliados tienen el derecho a la libre escogencia de los regímenes pensionales. No obstante, esa libertad opera dentro del marco legal establecido.

Por esta razón a continuación hacemos algunas precisiones acerca de la reglamentación vigente en materia de traslados y le informamos que todo afiliado conserva el derecho de trasladarse de régimen, siempre y cuando:

- Hayan permanecido en el último régimen por lo menos cinco años contados a partir de la selección inicial o el último traslado válido
- No les faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez.

De otro lado, es preciso que conozca que la Corte Constitucional manifestó en la Sentencia C-1024 de 2004 lo siguiente:

... "bajo el entendido que las personas que reúnen las condiciones del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que, habiéndose trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad, no se hayan regresado al régimen de prima media con prestación definida, pueden regresar a éste -en cualquier tiempo-, conforme a los términos señalados en la sentencia C-789 de 2002" ...

Por su parte, la sentencia C-789 de 2002 precisó que:

... "el régimen de transición se aplica a quienes, estando en el régimen de prima media con prestación definida, se trasladaron al régimen de ahorro individual con solidaridad,

Medellín: Cll. 49 No. 63 - 100 Medellín Torre Protección. Tel: (054) 230 7500 * Bogotá: Transv. 23 N. 97 - 73 piso 5 Edificio City Business. Tel: (051) 601 2525 - 601 3535 * Cali: Cll. 64 Norte No. 5B - 146 Centro Empresarial Local 47. Tel: (052) 608 0086 * Barranquilla: Cra. 52 No. 76 - 167 C.C. Atlantic Center Oficina 504 Locales 113 y 114. Tel: (055) 360 8929

www.proteccion.com * Línea de servicio Nacional 01 8000 52 8000 * NIT. 800.138.188-1

Protección

habiendo cumplido el requisito de quince (15) años o más de servicios cotizados al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social en pensiones, y decidan regresar al régimen de prima media con prestación definida, siempre y cuando: a) trasladen a éste todo el ahorro que efectuaron al régimen de ahorro individual con solidaridad; y b) dicho ahorro no sea inferior al monto del aporte legal correspondiente, en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media. "...

Ahora bien, la Corte Constitucional decidió unificar los criterios y requisitos para lograr el traslado de régimen, cuando ya no se cumplen los requerimientos de ley y en este sentido se pronunció en Sentencia SU062-10. (Sentencia unificada) la cual entró a regir a partir del 1 de febrero de 2010 y estableció claramente los siguientes requisitos:

- Tener a 1° de abril de 1994, 15 años de servicios prestados o cotizados, equivalentes a 750 semanas.
- Que el ahorro hecho en el régimen de ahorro individual no sea inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que hubiere permanecido en el régimen de prima media.

De acuerdo con lo anterior, usted se encuentra dentro de la limitante de que trata el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificada por el artículo 2° de la Ley 797 de 2003, toda vez que a la fecha cuenta con 51 años, y la edad de pensión para las mujeres establecida por ley es 57 años, situación que impide retornar al Régimen de Prima Media – RPM con Prestación Definida en los términos de la citada norma.

Por otro lado; usted no reúne los presupuestos establecidos en la Sentencia SU 062-10, debido a que de acuerdo con la información que reposa en la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para la entrada en vigor del Sistema General de Pensiones el afiliado en mención no había cotizado más de 15 años, documento que enviamos adjunto a este comunicado para su respectiva validación.

Si tiene alguna duda o quiere conocer más acerca de esta información, puede comunicarse con nuestro Asesor Virtual Pronto disponible en el Portal Web www.proteccion.com y en la App de Protección o comunicarse con nuestra Línea de Servicio.

Cordialmente,

Yenifer Alejandra Gallego Araque
Equipo de Atención de Solicitudes.
Protección S.A.

Medellín: Cll. 49 No. 63 - 100 Medellín Torre Protección. Tel: (054) 230 7500 * Bogotá: Transv. 23 N. 97 - 73 piso 5 Edificio City Business. Tel: (051) 601 2525 - 601 3535 * Cali: Cll. 64 Norte No. 5B - 146 Centro Empresarial Local 47. Tel: (052) 608 0086 * Barranquilla: Cra. 52 No. 76 - 167 C.C. Atlantic Center Oficina 504 Locales 113 y 114. Tel: (055) 360 8929

www.proteccion.com * Línea de servicio Nacional 01 8000 52 8000 * NIT. 800.138.188-1

10/3/2020

Resumen Historia Laboral

SOLICITADO
POR

mhlmarli 172.27.2.1

FECHA Y
HORA

10/03/2020 10:52:12

ENTIDAD

ADMINISTRADORA FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION S A

ORIGEN DE DATOS	DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
Registraduría/Das	C 32679731	PALMA	ARIZA	VALENTINA	ANTONIA
Afiliados	C 32679731	PALMA	ARIZA	VALENTINA	ANTONIA

RESUMEN HISTORIA LABORAL



Nit/Patronal	Empleador	Novedad	Origen Información	Fecha Desde	Fecha Hasta	No.Días	Salario	Error/ observación
P 17016300107	CIA DE SEGUROS LA ANDINA SA	LABORAL	ISS	26/05/1987	31/01/1988	251	\$25,530	
P 17016300107	CIA DE SEGUROS LA ANDINA SA	LABORAL	ISS	01/02/1988	31/01/1989	366	\$39,310	
P 17016300107	CIA DE SEGUROS LA ANDINA SA	LABORAL	ISS	01/02/1989	31/05/1989	120	\$41,040	
P 17016300107	CIA DE SEGUROS LA ANDINA SA	LABORAL	ISS	01/06/1989	28/02/1990	273	\$54,630	
P 17016300107	CIA DE SEGUROS LA ANDINA SA	LABORAL	ISS	01/03/1990	28/02/1991	365	\$70,260	
P 17016300107	CIA DE SEGUROS LA ANDINA SA	LABORAL	ISS	01/03/1991	29/02/1992	366	\$89,070	
P 17016300107	CIA DE SEGUROS LA ANDINA SA	LABORAL	ISS	01/03/1992	30/04/1992	61	\$111,000	
P 17016300107	CIA DE SEGUROS LA ANDINA SA	LABORAL	ISS	01/05/1992	28/02/1993	304	\$123,210	
P 17016300107	CIA DE SEGUROS LA ANDINA SA	LABORAL	ISS	01/03/1993	28/02/1994	365	\$150,270	
P 17016300107	CIA DE SEGUROS LA ANDINA SA	LABORAL	ISS	01/03/1994	30/06/1994	122	\$206,380	
P 17016300107	CIA DE SEGUROS LA ANDINA SA	LABORAL	ISS	01/07/1994	31/12/1994	184	\$227,018	3814,
N 860004875	SEGUROS LA ANDINA S A	LABORAL	POST 94	01/01/1995	31/01/1995	31	\$210,000	
N 860004875	SEGUROS LA ANDINA S A	LABORAL	POST 94	01/02/1995	30/04/1995	89	\$297,600	
N 860004875	SEGUROS LA ANDINA S A	LABORAL	POST 94	01/05/1995	31/05/1995	31	\$298,000	
N 860004875	SEGUROS LA ANDINA S A	LABORAL	POST 94	01/06/1995	30/06/1995	30	\$446,400	
N 860004875	SEGUROS LA ANDINA S A	LABORAL	POST 94	01/07/1995	31/07/1995	31	\$297,600	
N 860004875	SEGUROS LA ANDINA S A	LABORAL	POST 94	01/08/1995	30/09/1995	61	\$350,000	
N 860004875	SEGUROS LA ANDINA S A	LABORAL	POST 94	01/10/1995	31/10/1995	31	\$1,076,200	
N 860004875	SEGUROS LA ANDINA S A	LABORAL	POST 94	01/11/1995	18/11/1995	18	\$350,000	
N 860007322	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	NEGACION	CENISS			0	\$0	

EL NÚMERO DE SEMANAS REPORTADAS TANTO EN LA PANTALLA COMO EN EL SERVICIO SE CALCULA DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 1748 DE 1995.

SUBTOTALES

HISTORIA HASTA 31/03/1994

HISTORIA TOTAL

10/3/2020

Resumen Historia Laboral

LABORADOS		LICENCIAS / MORAS		SIMULTANEOS		LABORADOS		LICENCIAS / MORAS		SIMULTANEOS	
Días	Semanas	Días	Semanas	Días	Semanas	Días	Semanas	Días	Semanas	Días	Semanas
2502	357.43	0	0.00	0	0.00	3099	442.71	0	0.00	0	0.00
TOTALES : LABORADOS-LICENCIAS-SIMULTANEOS						TOTALES : LABORADOS-LICENCIAS-SIMULTANEOS					
DÍAS: 2502		SEMANAS: 357.43		DÍAS: 3099		SEMANAS: 442.71					

El número de semanas se calculó con días calendario

[VER DETALLE](#)

DOCUMENTOS ALTERNOS

DETALLE	DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	APELLIDOS	NOMBRES
DETALLE HISTORIA	63111404579	TARJETA DE IDENTIDAD	PALMA ARIZA	VALENTINA ANTONIA

REPORTADO COMO ACTIVO CON APORTES A PRESTACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 1994 CON:

TIPO DOC. APORTANTE	DOCUMENTO APORTANTE	NOMBRE APORTANTE	TIPO APORTANTE
Patronal(P)	17016300107	CIA DE SEGUROS LA ANDINA SA	11 - Facturación Can

CONVENCIONES DE ERRORES/OBSERVACIONES

Error/Observación	Description
3814	OBSERVACIÓN: EL ARCHIVO LABORAL MASIVO DEL ISS/COLPENSIONES 1967-1994 PRESENTA UN INGRESO SIN RETIRO Y ESTÁ EN LA TABLA RELACIONES LABORALES CON TIPO DE AFILIACIÓN EN PENSION (1: PENSION, SALUD, RIESGO; 2: PENSION, 4: PENSION RIESGOS PROFESIONALES, 7: PENSION, SALUD), SE ASUME EL 31 DE DICIEMBRE DE 1994 COMO FECHA DE RETIRO

INDICIOS HISTORIA LABORAL EMPLEADORES PUBLICOS, LA INFORMACION REGISTRADA COMO INDICIO NO ESTA CERTIFICADA POR EL EMPLEADOR. ESTA HISTORIA DEBE SER CONFIRMADA Y VERIFICADA POR LAS ADMINISTRADORAS DE PENSIONES QUE CONSULTAN LA APLICACION DE BONOS PENSIONALES DEL MINISTERIO DE HACIENDA, DIRECTAMENTE CON EL EMPLEADOR.

Bogotá D.C., 09 de marzo de 2020

BZ2020_3375068-0684965

Señor (a)

VALENTINA ANTONIA PALMA ARIZA

Carrera 52 No. 43 - 31 Oficina 206

Medellín, Antioquia

Referencia: Radicado No. 2020_3223606 del 06 de marzo de 2020
Ciudadano: VALENTINA ANTONIA PALMA ARIZA
Identificación: Cédula de Ciudadanía 32679731
Tipo de Trámite: Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS

Respetado(a) señor(a):

Reciba un cordial saludo de la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES. En respuesta a su petición relacionada con: “(...) que autoricen mi traslado de la AFP PROTECCIÓN S.A. A COLPENSIONES (...)”, se informa que la circular 019 de 1998 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia estableció que cuando el afiliado decida trasladarse de régimen o de administradora, expresará su voluntad mediante el diligenciamiento del correspondiente formulario ante el empleador o ante la nueva entidad administradora, de conformidad con las disposiciones vigentes sobre el particular.

Es por ello que la solicitud de afiliación o traslado fue realizada de manera directa y voluntaria ejerciendo su derecho a la libre elección de régimen, de conformidad con lo establecido en la ley 100 de 1993, Artículo 13 Literal B.

Sin embargo, el 23 de octubre del 2015 se firmó el decreto 2071 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual dice que las administradoras de pensiones deben proporcionar a los afiliados información completa de los beneficios, inconvenientes y efectos de la toma de decisiones en relación con su participación en cualquiera de los dos regímenes pensionales (de Prima Media o Ahorro Individual). Los afiliados podrán ir a cualquiera de las oficinas de Colpensiones y de los fondos privados o podrán ingresar a la página Web donde hay información sobre los regímenes o pueden comunicarse telefónicamente para saber a dónde dirigirse y buscar la asesoría.

Lo anterior, teniendo en cuenta la circular 016 de 2016 de la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante la cual se establecen los mecanismos para que tanto las AFP como Colpensiones realicen dicha asesoría a partir de 01/10/2016 a las mujeres de 42 años o

1 de 3

Continuación Respuesta Radicado No. 2020_3223606 del 06 de marzo de 2020

mayores, y hombres de 47 años o mayores, desde dicha fecha los ciudadanos no se podrán trasladar de Régimen sin antes haber recibido dicha asesoría, por lo cual dicha restricción NO ES RETROACTIVA y comienza a regir a partir de la fecha dispuesta por la Superintendencia Financiera de Colombia.

En cumplimiento a la Ley 797 de 2003, artículo 2º, literal E: "Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez".

Por lo anterior, no es procedente anular la afiliación, por cuanto el traslado fue realizado por la señora Valentina Antonia Palma Ariza ejerciendo su derecho a la libre elección de régimen, de conformidad con lo establecido en la ley 100 de 1993, Artículo 13 Literal B.

Es procedente manifestar que de acuerdo a la normatividad vigente Colpensiones procede a realizar anulación de traslado cuando:

1. Presuntamente se cometió falsedad en el formulario de afiliación: Es necesario que la Administradora de fondos de Pensiones - AFP en la que presuntamente se cometió la falsedad o el directo interesado interponga la denuncia penal de falsificación en documento (público o privado) ante la Fiscalía General de la Nación con el fin de determinar la veracidad o falsedad del documento, de conformidad con lo establecido en el Título IX Capítulo III de la Ley 599 de 2000 referente a los delitos contra la fe pública, en especial a la falsedad en documentos.

Una vez la autoridad competente se pronuncie sobre el asunto, el ciudadano o la AFP respectiva podrán solicitar la anulación del traslado diligenciando los formularios de la Entidad y allegando copia del pronunciamiento emitido por parte de la Fiscalía. De otra parte, es importante anotar que el informe grafológico puede constituirse como un elemento probatorio de la presunta falsedad que se alega, más no como documento que declare la falsedad, situación que solo puede ser declarada por la autoridad competente para tal efecto.

2. El empleador lo afilió sin su consentimiento: El formulario de afiliación no fue firmado por el afiliado, o se suplantó la firma del mismo, esta última debe ser probada ante la autoridad judicial competente.

Continuación Respuesta Radicado No. 2020_3223606 del 06 de marzo de 2020

Teniendo en cuenta lo anterior, no es posible activar ninguna la afiliación al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, como tampoco recibir los aportes realizados en la AFP.

En caso de requerir información adicional, por favor acercarse a nuestros Puntos de Atención Colpensiones (PAC); comunicarse con la línea de servicio al ciudadano en Bogotá al 4890909, en Medellín al 2836090, o con la línea gratuita nacional al 018000 41 0909, en donde estaremos dispuestos a brindarle el mejor servicio.

Agradecemos su confianza recordándole que estamos para servirle.

Atentamente,



Silvia Janeth Cortes Jaramillo
Profesional Máster 320-08 con asignación de funciones de Directora de Administración de Solicitudes y PQRS.

Proyectó: JSRODRIGUEZR
Revisó:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 4313091146442480

Generado el 25 de junio de 2021 a las 15:13:12

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

EL SECRETARIO GENERAL

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el numeral 10 del artículo 11.2.1.4.59 del Decreto 1848 del 15 de noviembre del 2016.

CERTIFICA

RAZÓN SOCIAL: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A.
sigla PROTECCION

NATURALEZA JURÍDICA: Sociedad Anónima De Nacionalidad Colombiana. Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CONSTITUCIÓN Y REFORMAS: Escritura Pública No 3100 del 12 de agosto de 1991 de la Notaría 11 de MEDELLIN (ANTIOQUIA). bajo la denominación Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. sigla Protección

Resolución S.F.C. No 1850 del 14 de noviembre de 2012. La Superintendencia Financiera de Colombia no objeta la fusión por absorción de ING Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía S.A. por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía PROTECCIÓN S.A., protocolizada mediante escritura pública 2086 del 26 de diciembre de 2012 notaría 14 de Medellín

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Resolución S.B. 3504 del 27 de septiembre de 1991

Resolución S.B. 3504 del 07 de septiembre de 1991 autoriza administrar Fondos de Cesantías Protección, identificado con Nit No. 800.170.494-5.

Oficio 92005423-16 del 09 de noviembre de 1992, la Superintendencia Bancaria autoriza la constitución del Fondo de Pensiones de Jubilación Smurfit de Colombia.

Oficio 92005423-26 del 09 de marzo de 1993 la Superintendencia Bancaria autoriza Fondo de Pensiones Voluntarias, identificado con Nit No. 800.198.281-5.

Resolución S.B. 0570 del 06 de abril de 1994 Concedió a dicha sociedad autorización para administrar Fondos de Pensiones Obligatorias del régimen de Ahorro Individual con solidaridad. En virtud de lo dispuesto por la Ley 1328 del 15 de Julio de 2009, se adoptó el esquema de Multifondos en el régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, por lo tanto los tipos de Fondos de Pensiones son: El Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Moderado, identificado con Nit No. 800.229.739-0, el Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Mayor Riesgo, identificado con Nit No. 900.379.896-4, el Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Conservador, identificado con Nit No. 900.379.759-3 y el Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Retiro Programado, identificado con Nit No. 900.379.921-0.

Oficio 2007022892-002 del 17 de mayo de 2007, la Superintendencia Bancaria autoriza administrar el Fondo de Pensiones XM.

REPRESENTACIÓN LEGAL: La Representación Legal de la sociedad será múltiple y estará simultáneamente a cargo de cada uno de los siguientes empleados, quienes la ejercerán por sí solos: a) De un PRESIDENTE, que será elegido para un periodo de DOS (2) años por la JUNTA DIRECTIVA. A su cargo estará también la administración general de la sociedad. b) De uno o más Vicepresidentes y que serán, nombrados por la JUNTA DIRECTIVA en cualquier tiempo, y para los cuales dicho órgano en el acto de nombramiento determinará si ostentan la calidad de Representante Legal de la Sociedad. c) De uno o más Gerentes Regionales, que serán

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 4313091146442480

Generado el 25 de junio de 2021 a las 15:13:12

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

nombrados por el PRESIDENTE en cualquier tiempo y ejercerán la Representación Legal de la Sociedad en cuanto a los negocios propios de sus oficinas y de acuerdo con la delegación de funciones que les confiera el PRESIDENTE o alguno de los Vicepresidentes con Representación Legal. Los Gerentes Regionales tendrán también la representación Legal de la Sociedad para atender en su nombre las audiencias de conciliación y tendrán bajo su responsabilidad administrativa una, o más sucursales, agencias u oficinas. Corresponde al PRESIDENTE determinar el territorio en el cual ejercerán su jurisdicción y las Sucursales, agencias, u oficinas que quedarán bajo su dependencia administrativa. d) De uno o más Gerentes de Sucursal, agencia u oficina, que serán nombrados por el PRESIDENTE y ejercerán la representación legal de la sociedad en cuanto a los negocios propios de su oficina y de acuerdo con la delegación de funciones que les confiera el PRESIDENTE o alguno de los Vicepresidentes con Representación Legal. PARÁGRAFO 1º Para efectos de la Representación Legal Judicial de la Sociedad, tendrán igualmente la calidad de Representantes Legales judiciales el Director Procesal y el Jefe de Cobro Jurídico, quienes representarán a la sociedad ante las autoridades jurisdiccionales, administrativas, políticas, entidades centralizadas y descentralizadas del Estado. Igualmente, serán Representantes Legales Judiciales para los exclusivos efectos de representar a la Sociedad en las Audiencias de Conciliación judiciales o extrajudiciales, para absolver interrogatorios de parte, para recibir notificaciones, tanto ante autoridades jurisdiccionales, administrativas, políticas, entidades centralizadas y descentralizadas del Estado, los abogados u otras personas que con tal fin designe la JUNTA DIRECTIVA. FUNCIONES DEL PRESIDENTE: Son funciones del PRESIDENTE: 1. Representar legalmente la Sociedad y tener a su cargo la inmediata dirección y administración de sus negocios. 2. Celebrar en nombre de la Sociedad todos los contratos relacionados con su objeto social. 3. Ejecutar y hacer cumplir las decisiones de la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS y de la JUNTA DIRECTIVA. 4. Nombrar y remover libremente los empleados de sus dependencias, así como a los demás que le corresponda nombrar y remover en ejercicio de la delegación de funciones que pueda hacerle la JUNTA DIRECTIVA. 5. Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que considere necesarios para representar a la Sociedad. 6. Adoptar las medidas necesarias para la debida conservación de los bienes sociales y para el adecuado recaudo y aplicación de sus fondos, vigilar y dirigir las actividades de los empleados de la Sociedad e impartir las ordenes e instrucciones que exija la buena marcha de la empresa. 7. Citar a la JUNTA DIRECTIVA cuando lo considere necesario o conveniente y mantenerla adecuada y oportunamente informada sobre las marcha de los negocios sociales; someter a consideración los balances de prueba y suministrarle todos los informes que ella le solicite en relación con la Sociedad y con sus actividades. 8. Presentar a la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS anualmente en su Reunión Ordinaria, el balance de fin de ejercicio junto con los informe y proyecto de distribución y demás detalles e informaciones especiales exigidos por la Ley, previo el estudio, consideraciones y aprobación inicial de la JUNTA DIRECTIVA. El informe contendrá además una descripción de los riesgos inherentes a las actividades relacionadas con la Sociedad y demás aspectos relativos a su operación de conformidad con las normas vigentes. 9. Cumplir, hacer cumplir y difundir adecuadamente el Código de Buen Gobierno de la Sociedad y 10. Las demás que le corresponde de acuerdo con la Ley. FACULTADES: La Representación Legal de la Sociedad corresponde a las personas enunciadas en el Artículo 48 de estos estatutos, quien en los términos de esa disposición podrán celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que tengan el carácter simplemente preparatorio, accesorio o complementario para la realización de los fines que la Sociedad persigue y los que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la Sociedad. Las operaciones, actos y contratos de que trata este artículo no tendrán limitación alguna. (Escritura Pública 415 del 04 de mayo de 2017 Notaria 14 de Medellín)

Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes personas:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Juan David Correa Solórzano Fecha de inicio del cargo: 05/05/2016	CC - 98542022	Presidente
María Claudia Rey Castillo Fecha de inicio del cargo: 28/01/2021	CC - 51985303	Vicepresidente Comercial
Patricia Restrepo Gutiérrez Fecha de inicio del cargo: 18/09/2014	CC - 42825614	Vicepresidente de Riesgos



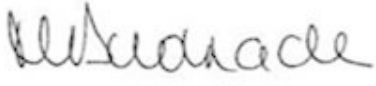
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 4313091146442480

Generado el 25 de junio de 2021 a las 15:13:12

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Juan Pablo Arango Botero Fecha de inicio del cargo: 12/03/2020	CC - 98545420	Vicepresidente Jurídico y Secretario General
Felipe Andres Herrera Rojas Fecha de inicio del cargo: 12/01/2017	CC - 15515499	Representante Legal en Calidad de Vicepresidente de Inversiones
Zoé Isaza Restrepo Fecha de inicio del cargo: 13/07/2016	CC - 39685753	Representante Legal Judicial
Daniel Giraldo Giraldo Fecha de inicio del cargo: 11/12/2019	CC - 1037581063	Representante Legal Judicial
Maria Carolina Peñuela Pérez Fecha de inicio del cargo: 22/06/2015	CC - 43971629	Representante Legal Judicial
Juliana Montoya Escobar Fecha de inicio del cargo: 22/06/2015	CC - 39176497	Representante Legal Judicial
Sonia Eugenia Posada Arias Fecha de inicio del cargo: 01/07/2004	CC - 42969601	Representante Legal Judicial
Angela Maria Gaviria Londoño Fecha de inicio del cargo: 01/07/2004	CC - 39184304	Representante Legal Judicial
Adriana Lucia Mejía Turizo Fecha de inicio del cargo: 22/06/2015	CC - 43985699	Representante Legal Judicial
Pablo Mauricio Ferrer Henao Fecha de inicio del cargo: 26/03/2020	CC - 71722470	Vicepresidente de Tecnología y Servicios a los Clientes


MÓNICA ANDRADE VALENCIA
SECRETARIO GENERAL

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."